



ORDEN ADMINISTRATIVA NÚM. 2015-001

Principios de Cultura Ética para Contratistas, Proveedores de Servicios y Solicitantes de Incentivos de CDCOOP

El Código de Ética se promulga mediante la Ley Número 84 de 18 de junio de 2002, y la Ley Número 1 de 3 de enero de 2012, mejor conocida como “Ley de Ética Gubernamental”. El Código de Ética complementa las normas de conducta aplicables a servidores y ex servidores públicos. Mediante este Código se requiere que los contratistas, los proveedores de bienes o servicios, y los solicitantes de incentivos se abstengan de llevar a cabo o participar en conducta que directa o indirectamente implique que servidores o ex servidores públicos infrinjan las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.

La Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico en cumplimiento con las normas éticas y con el propósito de contribuir a la transparencia e integridad de los procesos de contratación para el suministro de bienes y servicios con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, acoge estos Principios de Cultura Ética para Contratistas, Proveedores de Servicios y Solicitantes de Incentivos.

I. Aplicabilidad

Los presentes principios de conducta reglamentan a los contratistas y proveedores de bienes o servicios con la CDCOOP, así como a los solicitantes que reciben algún incentivo económico de CDCOOP.

La aceptación de los principios establecidos es condición esencial e indispensable para que éstos o sus representantes puedan efectuar transacciones o establezcan convenios con CDCOOP. Es requisito indispensable que toda persona se comprometa a regirse por las disposiciones de este Código de Ética establecidas en el Artículo 5 de la Ley Núm. 84 de 18 de junio de 2002.

II. Responsabilidades y obligaciones éticas para los contratistas, proveedores de bienes o servicios, y solicitantes de incentivos económicos:

- a) Toda persona procurará un trato profesional y respetuoso para con los funcionarios o empleados públicos de las agencias ejecutivas, y exigirá lo mismo de estos en todo momento.

- b) Toda persona que en su vínculo con las agencias ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico participe de licitaciones en subastas, le presente cotizaciones, interese perfeccionar contratos con ellas o procure recibir la concesión de cualquier incentivo económico, tendrá la obligación de divulgar toda la información necesaria para que las agencias ejecutivas puedan evaluar detalladamente las transacciones y efectuar determinaciones correctas e informadas.
- c) Toda persona deberá observar las máximas y los principios de excelencia y honestidad que cobijan a su profesión, además de las normas o cánones éticos de la Asociación o Colegio al cual pertenece y que reglamenta su oficio o profesión, tanto en la relación con sus competidores como con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el caso de personas que no pertenezcan a un Colegio o Asociación, o en el caso de asociaciones y colegios que no posean un canon de ética para sus miembros, deberán observar los principios generales de conducta ética que se consideran razonables en su profesión u oficio.
- d) Toda persona cotizará a base de precios justos por sus servicios, considerando la experiencia, la preparación académica y los conocimientos técnicos; en los acuerdos de suministros de bienes se deberá considerar la calidad de los bienes. Se comprometerá a realizar sus trabajos dentro del término pautado, a garantizar la calidad de sus servicios y los bienes que suministra, y a cobrar por sus servicios mediante la presentación de una factura en la que se certifique su corrección, que los servicios fueron prestados en su totalidad o los bienes entregados dentro del tiempo límite establecido, y que no se ha recibido compensación por los mismos. Toda factura para el cobro de bienes o servicios que se presente ante las agencias ejecutivas deberá contener la siguiente certificación: "Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de la entidad gubernamental es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios productos del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la entidad gubernamental. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados y los servicios han sido prestados, y no se ha recibido pago por ellos. Disponiéndose que los contratistas y proveedores de bienes y servicios del Fondo de Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, adscrito al Departamento de Salud, estarán exentos de cumplir con la certificación que dispone este inciso".
- e) Ninguna persona ofrecerá o entregará a servidor público o ex-servidor público de las agencias ejecutivas, o miembros de la unidad familiar de estos, con la que interese establecer, o haya establecido, una relación contractual, comercial o financiera, directa o indirectamente, bienes de valor monetario, contribuciones, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, préstamos, o participación en alguna entidad mercantil o



negocio jurídico. En los casos que se refieren a ex servidor público la anterior prohibición se extenderá por un (1) año a partir del cese de sus funciones en la agencia ejecutiva. Esta obligación se extiende a la etapa previa y posterior a la perfección del contrato, negocio o transacción, así como a la duración del mismo.

- f) Toda persona colaborará con cualquier investigación que inicie el gobierno sobre transacciones de negocios, otorgación de contratos o concesión de incentivos gubernamentales del cual fue parte o se benefició directa o indirectamente.
- g) Ninguna persona intervendrá en asuntos que puedan desembocar en un conflicto de intereses o que tengan apariencia de serlo.
- h) Toda persona está obligada a denunciar aquellos actos que estén en violación de este código, que constituyan actos de corrupción, o se configuren en delitos constitutivos de fraude, soborno, malversación o apropiación ilegal de fondos, y de los que tenga propio y personal conocimiento, que atañen a un contrato, negocio, o transacción entre el gobierno y un contratista, proveedor de bienes y servicios o participantes de incentivos económicos. Los denunciantes estarán protegidos al amparo de la [Ley Núm. 426 de 7 de noviembre de 2000](#), según enmendada, y la [Ley Núm. 14 de 11 de abril de 2001](#), según enmendada.
- i) Ninguna persona que haya participado activamente en campañas políticas podrá entablar gestiones con los Secretarios, Jefes de Agencias, Ejecutivos Municipales, o Directores Ejecutivos de Corporaciones Públicas, conducentes a la concesión indebida de ventajas, privilegios o favores para el beneficio de estos, o de cualquier otra persona, representados por estos. Tampoco se podrán requerir los servicios de personas que hayan participado activamente en campañas políticas para los fines antes referidos.
- j) Ninguna persona utilizará la información confidencial, adquirida en el curso o como consecuencia de alguna gestión que le haya sido encomendada mediante contrato por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para fines ajenos a la encomienda contratada, ni para obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio económico para él, para un miembro de su unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad.
- k) Ninguna persona solicitará u obtendrá de un servidor o ex servidor público, información confidencial, con el propósito de obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio económico para él o para cualquier otra persona natural o jurídica; ni para fines ajenos a la encomienda contratada.
- l) Ninguna persona aceptará o mantendrá relaciones contractuales o de negocio con un servidor público, o miembro de su unidad familiar, que tenga el efecto de menoscabar la independencia de criterio del funcionario o empleado público en el desempeño de sus

funciones oficiales. Se le prohíbe a toda persona aceptar o mantener relaciones contractuales o de negocio con ex servidores públicos durante un (1) año a partir del momento en que hayan dejado de ocupar sus cargos, si en el desempeño de sus funciones gubernamentales participaron directamente en transacciones entre las agencias ejecutivas y la persona.

- m) Ninguna persona podrá contratar con las agencias ejecutivas si existe algún conflicto de intereses. Toda persona deberá certificar que no representa intereses particulares en casos o asuntos que impliquen conflicto de intereses, o de política pública, entre la agencia ejecutiva y los intereses particulares que represente.
- n) Ninguna persona podrá solicitar, directa o indirectamente, que un funcionario o empleado público represente sus intereses privados, realice esfuerzos o ejerza influencia para obtener un contrato, el pago de una reclamación, un permiso, licencia o autorización, o en cualquier otro asunto, transacción o propuesta en la cual dicha persona o su unidad familiar tenga intereses privados, aún cuando se trate de actuaciones oficiales del funcionario o empleado público dentro del ámbito de su autoridad oficial.
- o) Ninguna persona inducirá a un servidor o exservidor público, a incumplir las disposiciones de la [Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985](#), según enmendada, conocida como "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
- p) Toda persona que haya sido convicta por delitos contra el erario, la fe pública, o que involucren el mal uso de los fondos o propiedad pública estará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme a los periodos dispuestos en la [Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000](#), según enmendada. Todo contrato deberá incluir una cláusula de resolución en caso de que la persona que contrate con las agencias ejecutivas resultare convicto, en la jurisdicción estatal o federal, por alguno de los delitos enumerados. En los contratos se certificará que la persona no ha sido convicta, en la jurisdicción estatal o federal, por ninguno de los delitos antes mencionados. El deber de informar será de naturaleza continua durante todas las etapas de contratación y ejecución del contrato.

III. Convenios o contratos con CDCOOP

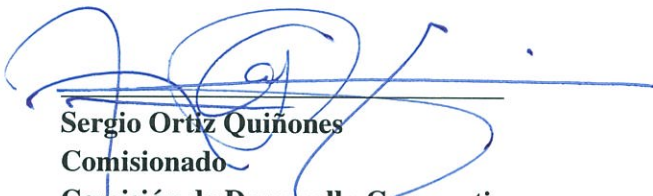
El compromiso de regirse por las disposiciones de estos Principios de Cultura Ética para Contratistas, Proveedores de Servicios y Solicitantes de Incentivos se hará constar en todo contrato y subasta entre CDCOOP y contratistas o suplidores de servicios, y en toda solicitud de incentivo económico provisto por el gobierno. La CDCOOP entregará a los contratistas, proveedores de bienes o servicios, y solicitantes de incentivos económicos, desde el momento en que acuda a un proceso de subasta en cualquiera de sus etapas o se otorgue un contrato,

copia de la Ley y se acreditará con la firma de quien lo reciba dicha entrega, el cual formará parte del expediente de la subasta o contrato.

IV. Procedimientos

Le corresponde a CDCOOP velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Ética y en los Principios de Cultura Ética para Contratistas, Proveedores de Servicios y Solicitantes de Incentivos de CDCOOP. Toda violación al Código de Ética, a los Principios de Cultura Ética o a la Ley de Ética Gubernamental, será referida a la Oficina de Ética Gubernamental para su investigación y determinación de incumplimiento a los deberes y obligaciones impuestos. Se notificará al Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualquier violación al Código de Ética o a la Ley de Ética Gubernamental.

La presente Orden Administrativa es efectiva hoy 30 de junio de 2015, en San Juan Puerto Rico.



Sergio Ortiz Quiñones
Comisionado
Comisión de Desarrollo Cooperativo
de Puerto Rico